

LA NUEVA TRAGEDIA DEL PAEZ

Virtualmente eliminada protección arancelaria a la agricultura

EDITORIAL

El 6 de junio de 1994 se produjo un sismo de inmensa gravedad en cercanías del municipio de Toribío, en el departamento del Cauca. Como consecuencia de dicho sismo, se produjeron graves desbordamientos de algunos ríos y avalanchas en varios municipios de los departamentos del Cauca y del Huila. Igualmente se produjeron graves daños en las vías de penetración, se interrumpió la prestación de servicios públicos esenciales y se afectó gravemente el desarrollo de la actividad económica y social en dicha zona del país.

Como parte de las medidas expedidas desde entonces para conjurar los efectos de la tragedia, y evitar la extensión de la crisis provocada por esta calamidad, el Gobierno concedió una serie de beneficios e incentivos tributarios en los municipios de las zonas nororiental del Cauca y central del Huila que se vieron afectados.

Inicialmente se expidieron los decretos 1 178 y 1264 de 1994, por medio de los cuales se declaró el estado de emergencia y se establecieron algunas exenciones tributarias para esta zona. Posteriormente, el Congreso de la República aprobó la ley 218 de 1995 de origen parlamentario, denominada "Ley Páez", la cual modificó el decreto 1 264, y fue reglamentada recientemente por el decreto 529 de 1996.

Los beneficios e incentivos tributarios otorgados fueron ampliados significativamente por esta Ley, dando condiciones sin precedentes en el país. Así mismo, la cobertura geográfica se incrementó, incluyendo municipios que no se vieron directamente afectados por el sismo, como en el caso de Puerto Tejada y Santander de Quilichao, cerca de Cali.

La Ley Páez estableció las siguientes cinco clases de beneficios tributarios:

1. Exención por un período de 10 años del impuesto sobre la renta, en cuantías descendentes que van desde un 100% para empresas preexistentes al desastre que generen nuevos empleos y para nuevas empresas establecidas entre junio de 1994 y junio de 1999, hasta un 25% para las nuevas que se establezcan entre los años 2001 y 2003.
2. Crédito fiscal para nuevas empresas en sectores de tardío rendimiento durante el período improductivo, equivalente al 15% de las inversiones que se realicen hasta fines del año 2003.
3. Deducción de la renta gravable del inversionista, equivalente al valor de las nuevas inversiones en acciones o a la participación en nuevas empresas establecidas en los municipios afectados.
4. Exención de todo impuesto, tasa o contribución a las importaciones de maquinaria, equipos, materias primas y repuestos que se instalen o utilicen en los municipios afectados. Las importaciones de ellos no pagarán arancel ni IVA hasta el 31 de diciembre del 2003.
5. Dividendos y ganancias ocasionales exentos para los accionistas de empresas localizadas en la zona, hasta 1999.

La exención arancelaria a las importaciones de materias primas es un motivo de gran preocupación, no solo para los palmicultores del país, sino en general para los productores agrícolas e industriales de estos bienes. El hecho de que los incentivos concedidos incluyan una exención total de gravámenes a dichos productos, implica que su importación para procesamiento en dicha zona tendrá arancel cero. En la práctica, esto significa la eliminación de la protección arancelaria a la producción agropecuaria en Colombia y, por ende, una reducción en los precios y en los ingresos de los productores nacionales.

Los subsectores de bienes transables, que luego se incorporan como materia prima a otros procesos agroindustriales, sin duda serán los más afectados con lo dispuesto por esta norma. Tal es el caso, por ejemplo, de las semillas oleaginosas y del aceite de palma, en el que los productores podrían ver nuevamente reducido su ingreso hasta en un 20%, adicional al esfuerzo descomunal que ya se ha hecho durante los años de la apertura económica.

La exención arancelaria a las materias primas afectará la competitividad de muchas actividades que actualmente se desarrollan en el país y en otros del Grupo Andino, como Ecuador. Así mismo, ello se constituye en un nuevo factor de distorsión y de competencia desleal para la producción agrícola e industrial del país. No debe perderse de vista que muchas agroindustrias tienen la capacidad de moverse fácilmente o montar nuevos centros de producción en muy corto tiempo, para aprovechar estos beneficios a las importaciones que, sin ninguna duda, van más allá de simplemente resarcir las pérdidas o daños causados por el desastre, o de unos incentivos normales para promover el desarrollo de esta región.

No se pretende desconocer la valiosa y legítima intención de redimir esta agobiada zona del país, pero tampoco se puede perder el sentido de las proporciones y soslayar el necesario equilibrio entre la recuperación de una región y el bienestar general del país.

Es imprescindible entonces que los distintos estamentos del sector agropecuario nacional, el parlamento y el mismo Gobierno tomen conciencia de los riesgos que estas medidas entrañan y aúnen esfuerzos para lograr reformar la Ley 218 de 1995, eliminando las exenciones arancelarias concedidas a la importación de materias primas, en tanto ellas amenazan gravemente

la estabilidad de la producción agrícola nacional y van en contravía de las disposiciones constitucionales que señalan un tratamiento especial para este sector en Colombia.

Fedepalma ha venido realizando intensas gestiones en este sentido, pues de no corregirse muy pronto esta perforación al arancel externo común, los palmicultores nacionales se verían abocados a una situación económica muy difícil, que finalmente podría conducir a la liquidación de muchas empresas y cultivos, agudizando la crisis que padecen los pobladores y productores del campo colombiano.

THE NEW PAEZ TRAGEDY

Tariff protections for agriculture virtually eliminated

EDITORIAL

On 6th June 1994, a terrible earthquake occurred in the area around the town of Toribio, in Cauca department. As a consequence of this, several rivers burst their banks, with serious results, and there were avalanches in a number of towns in Cauca and Huila departments. Serious damage was caused to roads in the area, and essential public services were disrupted. All economic and social activities in this part of the country were seriously affected.

As part of the measures adopted at the time to offset the effects of the tragedy and prevent the crisis caused by the calamity from spreading, the government granted a series of tax incentives and benefits in the towns of north east Cauca and central Huila that had been affected by the disaster.

Initially, Decrees 1178 and 1264 of 1994 were issued, which declared a state of emergency and established a number of tax exemptions for the region. Subsequently, Congress passed Law 218 of 1995, which had parliamentary origins and was known as the «Páez Law», and which modified Decree 1264; this has recently been regulated by Decree 529 of 1996.

The tax incentives and benefits granted initially were extended significantly by this Law, with the result that unprecedented conditions were created in the country. The geographical cover was also expanded, to bring in towns that had not been directly affected by the earthquake, such as Puerto Tejada and Santander de Quilichao, near Cali.

The Páez Law established the following five classes of tax benefit:

1. Income tax exemption for a period of ten years, in descending sums ranging from 100% for companies that existed prior to the disaster which create new jobs and for new companies set up between June 1994 and June 1999, down to 25% in the case of new companies established between the years 2001 and 2003.
2. Fiscal credit for new companies in underperforming sectors during the unproductive period equivalent to 15% of investments made up to the end of the year 2003.
3. Deductions from the taxable revenue of investors equivalent to the value of new investments in shares or to the holding in new companies set up in the towns affected.
4. Exemption from all taxes, rates or contributions with respect to imported machinery, equipment, *raw materials* and parts installed or used in the towns affected. No tariffs or VAT will be paid on these imports until 31st December 2003.
5. Dividends and occasional gains exempt for shareholders of companies located in the area until 1999.

The tariff exemption on raw materials imports is a cause of great concern, not only for palm growers in the country but also for agricultural and industrial producers of these goods in general. The fact that the incentives granted include a total exemption from taxes on these products implies that if they are imported for processing in the region in question, they will have a zero tariff. In practice, this means the elimination of tariff protections on Colombian agricultural production and, therefore, reduced prices and lower income for national producers.

Tradeable goods that are subsequently used as raw materials in other agroindustrial processes will undoubtedly be the most seriously affected by the provisions stipulated in these regulations. This will be true, for example, with oily seeds and palm oil, where producers could once again see their income reduced by up to 20%, with this coming on top of the tremendous effort that has already been made during the years of economic liberalisation.

The tariff exemption on raw materials will affect the competitiveness of many activities currently going on in the country and in other Andean Group countries, such as Ecuador. It also represents a new distortion factor and another example of unfair competition for the country's agricultural and industrial production. It should not be forgotten that many agricultural industries are able to move easily or set up new production centres in a very short period of time, so as to take advantage of these import benefits which without any doubt at all go way beyond merely compensating for losses or damage caused by the disaster, or normal incentives to promote regional development.

There is no intention of belittling the valuable and legitimate attempts to alleviate the problems currently faced by this depressed area of the country, but at the same time we should not lose our sense of proportion and ignore the balance that is necessary between regional recovery and the general welfare of the country as a whole.

It is therefore absolutely essential that the different national agricultural sector bodies, parliament, and even the government itself, realise the risks these measures involve and join forces to ensure that Law 218 of 1995 is amended by eliminating the tariff exemptions granted on *raw materials* imports, as these represent a serious threat to stability in national agricultural production and go against constitutional provisions indicating that this sector should be given special treatment in Colombia.

Fedepalma has been making strenuous moves in this direction, as if this breach of the common external tariff is not corrected very quickly, national palm growers could get into a very difficult economic position, which could end up with many companies and plantations going into liquidation, thereby only intensifying the serious crisis inhabitants and producers alike are currently facing in the Colombian countryside.